Globethics Repository



Controlar el lobby corporativo y el financiamiento de las actividades políticas

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal
Authors	Transparency International
Publisher	Transparency International
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-06 17:49:43
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/177488

N.° 06/2009

Posición sobre políticas

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption



Controlar el lobby corporativo y el financiamiento de actividades políticas

La mayoría de las grandes compañías participan en el lobby corporativo y el financiamiento de actividades políticas. Esta actividad les permite comprender, supervisar y definir el desarrollo de las legislaciones y reglamentaciones. Los aportes económicos y en especie a campañas y partidos políticos pueden servir para apoyar el proceso político y el desarrollo de un país. Cuando ambas actividades son afrontadas con integridad y transparencia por una compañía, pueden representar una fuerza legítima y positiva. Sin embargo, la gran cantidad de fondos de que disponen las empresas y el estrecho vínculo que existe entre los legisladores y muchas de ellas puede traducirse en una influencia indebida y desleal en las políticas y actividad política de un país.

Una reglamentación más estricta y una mayor transparencia del lobby contribuyen a equilibrar los intereses de las empresas, los partidos y los políticos. Las compañías deben plantear sus posturas y acciones de incidencia de manera transparente y los políticos deben responder a estos esfuerzos manifestando honestamente sus vínculos con las empresas. Estos compromisos suponen la plena divulgación de las contribuciones políticas por parte de los partidos, los políticos y las compañías, por igual, así como la creación de registros que permitan llevar un seguimiento de las actividades, los gastos, los contactos y los objetivos de quienes participan en el lobby.

Índice

1. Transitar entre las actividades de lobby legítimas y la captura de las autoridades regulatorias
2. Respuestas

¿Qué son las contribuciones políticas y el lobby corporativo?

Según la *Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción de TI*, una 'contribución política' es "cualquier contribución, en efectivo o en especie, destinada a apoyar una causa política. Algunos ejemplos son el obsequio de bienes o servicios, actividades publicitarias o promocionales en respaldo de un partido político y la compra de entradas para eventos de recaudación de fondos"[1].

El 'lobby' es "cualquier actividad llevada a cabo con el fin de influir en las políticas y decisiones de un gobierno o institución para favorecer una determinada causa o resultado. Aun cuando estén permitidos por la ley, estos actos pueden tener consecuencias distorsionadas si el grado de influencia por parte de empresas, asociaciones, organizaciones y personas resulta desproporcionado"[2].

En parte, gracias al impulso de la sociedad civil, existe una presión creciente a nivel de juntas directivas y entre los accionistas para que la interacción política de las empresas tenga un carácter responsable y transparente, lo que permitiría controlar el destino de los gastos con fines políticos, así como constatar si las posturas de las compañías están alineadas en temas como políticas públicas con los valores e intereses a largo plazo. Las empresas deben responder a estas exigencias rindiendo cuentas a sus accionistas y al público sobre el alcance y la naturaleza de su participación en las políticas públicas. Al ofrecer informes oportunos sobre lobby y financiamiento político, las compañías reconocerán de manera inequívoca que la divulgación de las iniciativas de contacto es un elemento esencial del civismo corporativo responsable.

1. Transitar entre las actividades de lobby legítimas y la captura de las autoridades regulatorias

El límite entre lo aceptable e inapropiado cuando de trata de actividades de lobby y financiamiento político puede ser difícil de distinguir, dadas las distintas vías por las que las compañías pueden ejercer su influencia, tanto de manera explícita como reservada. Las actividades de lobby y financiamiento político inapropiadas que pueden traducirse en influencia indebida se manifiestan de distintas maneras:

Corrupción política

El riesgo de corrupción política se incrementa en entornos donde los salarios públicos son bajos, la duración de los cargos es incierta o existe una fuerte necesidad de generar fondos de campaña. Aún cuando no aparezcan estos factores, es posible que los legisladores y empleados públicos, impulsados nada más que por la codicia, acepten atenciones, obsequios, cargos en juntas directivas de compañías o sobornos ilícitos, a cambio de favorecer ciertos intereses comerciales mediante sus decisiones.

En 2008, el Tribunal Federal de Cuentas Alemán instó a que se modificara la práctica generalizada que permitía que empleados de empresas y grupos de interés trabajaran en ministerios federales y, a la vez, mantuvieran sus puestos en el sector privado. Se comprobó que al menos cien empleados tenían doble empleo y que asistían a reuniones internas y representaban a instituciones del gobierno sin revelar sus vínculos corporativos.

El favoritismo puede esconderse también a través de formas complejas de corrupción política que facilitan las relaciones personales entre empresas y líderes políticos por encima del bien común. Casi el 45% de los ejecutivos de 13 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informaron en sus respuestas a la *Encuesta de Fuentes de Soborno de 2008* de TI que era común recurrir a vínculos personales y familiares para conseguir la adjudicación de contratos públicos cuando sus empresas operan en países que no pertenecen a la OCDE.

En muchos países, las leyes sobre financiamiento de campañas y las sanciones penales para casos de soborno de funcionarios públicos son un elemento esencial para contrarrestar la influencia política indebida. Sin embargo, a menudo las leyes nacionales no reflejan los estándares estrictos incluidos en los acuerdos internacionales. Muchos países se han demorado en adoptar leyes que prohíban el soborno de funcionarios públicos extranjeros, pese a que los acuerdos internacionales —la Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de la OCDE contra el Soborno y el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa— incluyen estas disposiciones.

Conflictos de intereses

Los conflictos de intereses se plantean cuando los legisladores o sus familiares tienen intereses financieros directos en las industrias que deberían regular. Una práctica común y alarmante que tiene lugar en el Reino Unido es el nombramiento de políticos en las juntas directivas de empresas. Igualmente preocupante es el fenómeno de las 'puertas giratorias', que hace referencia al intercambio de personal entre las compañías y los gobiernos, una práctica que frustra la posibilidad de separar los intereses comerciales de las decisiones políticas. Según cuentas recientes, al menos setenta ex miembros del Senado de Texas practicaban el lobby y eran contratados para conseguir apoyo de sus ex colegas. En el Reino Unido, las empresas con vínculos políticos representan casi el 40% del valor de las compañías que cotizan en bolsa, mientras que en Rusia esta cifra asciende a más del 80%[3].

Desigualdad en el acceso a los políticos

La regulación de quienes practican el lobby es una práctica global relativamente reciente y, en muchos lugares, estas normas quedan rezagadas frente al acelerado crecimiento del sector. La mayoría de países aún no han implementado leyes destinadas a controlar las actividades de lobby, y aquellos que lo han hecho carecen de leyes estrictas. El registro de quienes practican el lobby de la Comisión Europea, por ejemplo, podría ser más efectivo si tuviera carácter obligatorio como en Estados Unidos y Canadá. Sin una mayor transparencia y rendición de cuentas en las prácticas de lobby, el público —que ya ahora tiene dificultades para conocer los gastos políticos de las empresas— se enfrenta a dificultades cada vez mayores para seguir participando en el debate sobre políticas.

Un control más profundo de los gastos corporativos asignados a quienes practican el lobby y a las campañas políticas puede, a su vez, reportar beneficios para las compañías. Es posible que el gasto político no sea compatible con la estrategia a largo plazo de la compañía, sus propietarios u otros actores interesados. Las actividades de lobby raramente requieren de la aprobación de la junta directiva, frecuentemente carecen de transparencia y tienden a salirse del sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. En 2008, casi un tercio de las compañías incluidas en el índice Standard & Poor 100 exigieron que la junta directiva controlara los gastos con fines políticos. Las decisiones sobre lobby que se adoptan sin consultar a la junta directiva pueden reflejar las preferencias políticas de determinados ejecutivos o centrarse exclusivamente en las ganancias a corto plazo, en vez de priorizar el crecimiento a largo plazo de la compañía.

Canales clandestinos para la influencia política

Es cada vez más común que las empresas transmitan sus intereses al público de forma directa, a través de iniciativas de incidencia, campañas y patrocinio corporativo. Sin embargo, los intentos legítimos de participación en el discurso público pueden verse frustrados si los actores del sector privado ofrecen información poco equilibrada o no manifiestan abiertamente sus intereses.

Las organizaciones artificiales denominadas "astroturf" —organizaciones de base ficticias conformadas y financiadas por agrupaciones de lobby o intereses

En la última década, los gastos asignados a actividades de lobby se han duplicado en Estados Unidos, y actualmente se cuenta un promedio de cinco personas que practican el lobby por político. En el ámbito de los estados en EE. UU., los gastos de lobby promedian los US$ 200.000 por legislador, y hay cerca de 16.000 personas que practican el lobby en todo el país. En Bruselas, sede de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, existen actualmente 2.500 organizaciones de lobby y 15.000 personas que practican el lobby, de los cuales dos tercios representan intereses comerciales.

Según informes de la prensa, la organización paneuropea 'Cancer United', que supuestamente defendía los derechos de los pacientes, se financiaba totalmente con fondos recibidos de una compañía farmacéutica suiza que produce medicamentos contra el cáncer. Además de contar con un ejecutivo senior de la compañía en la junta directiva de Cancer United, una firma de relaciones públicas perteneciente a la empresa funcionaba como secretaría de esta organización. Ante la falta de transparencia mostrada por Cancer United, los miembros del Parlamento Europeo y el titular de la Coalición Europea de Pacientes con Cáncer abandonaron la junta ejecutiva de esta organización[4].

corporativos— pueden resultar funcionales a los fines comerciales a corto plazo, pero también distorsionar el debate público auténtico en torno a temas importantes de política e impactar de manera duradera en la reputación cuando salen a la luz. Actividades como el "lobby periodístico" (journo-lobbying), a través de la cuales medios de comunicación aparentemente independientes son financiados por compañías para promover opiniones favorables del sector, resultan cada vez más frecuentes y sofisticadas, haciendo más difícil la diferenciación entre noticias independientes y contenidos pagos. Asimismo, el apoyo de las empresas a la comunidad científica por medio del financiamiento de cargos académicos, departamentos universitarios y grupos de expertos debe ser informado para garantizar que la integridad de estas instituciones de investigación no sea puesta en riesgo y que no se generen conflictos de intereses.

2. Respuestas

La variedad de métodos y normas para hacer frente a la influencia indebida por parte de las empresas en las políticas públicas está necesariamente determinada por las condiciones comerciales y políticas únicas de cada país, como el poder de la industria del lobby y el carácter de la sociedad civil en el ámbito local. En reconocimiento de la necesidad de adoptar estrategias diferenciadas, TI presenta algunas respuestas políticas que son aplicables en casos en que la actividad de la empresa amenaza con frustrar el desarrollo justo y transparente de políticas públicas.

Las empresas deben:

Tomar decisiones sobre participación política desde el ámbito de las juntas directivas.

- Las decisiones sobre participación en políticas públicas y gastos políticos deben ser adoptadas por la junta directiva de la compañía y consultadas con los accionistas.

Incluir las actividades y los gastos políticos en sus informes.

- La participación de la compañía en el ámbito político debe ser incorporada a los informes sobre sostenibilidad corporativa, del mismo modo que los estándares ambientales y sociales.
- Además de informar sobre las iniciativas de lobby, las compañías deben dar a conocer otras formas de participación política, como el financiamiento o el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, la investigación científica o las actividades de relaciones públicas.

El gobierno debe:

Reducir la posibilidad de conflictos de intereses.

- Los gobiernos en el ámbito nacional, regional y local deben establecer y aplicar reglamentaciones que reduzcan la posibilidad de conflictos de intereses. Esto incluye la divulgación de bienes e intereses por parte de funcionarios públicos y la fijación de períodos de "abstención" obligatorios para contrarrestar el fenómeno de las "puertas giratorias".

Incorporar registros de lobby obligatorios.

- Los gobiernos nacionales y regionales deben evaluar la posibilidad de crear registros obligatorios que exijan a quienes practican el lobby revelar información pública y periódica sobre sus clientes, así como del ámbito temático, objetivos, técnicas e información financiera. Los legisladores deben prever sanciones para el incumplimiento de estos estándares.

Generar transparencia en los procesos de adopción de decisiones.

- A fin de moderar la influencia de las empresas e incentivar la participación democrática, los políticos deben fomentar las audiencias públicas sobre políticas y los procesos consultivos de toma de decisiones que aseguren que los aportes de los ciudadanos sean tenidos en cuenta.

La sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad científica deben:

Mantener la independencia y reconocer los conflictos de intereses.

- A fin de preservar la confianza del público y la integridad de sus instituciones, los medios de comunicación, la sociedad civil y la comunidad científica deben asegurar la transparencia de las fuentes de financiamiento e informar de manera proactiva los conflictos de intereses.

Monitorear la participación política de las empresas.

- Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que trabajan en temas de gobernabilidad y democracia deben considerar la posibilidad de llevar un control de la actividad de lobby. Estos ejercicios brindan a los ciudadanos la información necesaria para participar en debates públicos informados.

Referencias

[1] Transparency International, "Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción" (Berlín, TI, julio de 2009). www.transparency.org/content/download/45306/725785/file/TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.

[2] Transparency International, "Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción" (Berlín, TI, julio de 2009).www.transparency.org/content/download/45306/725785/file/TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.

[3] En este contexto, se definen como compañías en las que los accionistas mayoritarios o los más altos ejecutivos son además miembros del parlamento, ministros o mantienen vínculos estrechos con un político de alto rango o con un partido. Ver, M. Faccio, "Politically Connected Firms", American Economic Review, vol. 96, n.° 1 (2006).

[4] Ver: S. Boseley, "Concern over cancer group's link to drug firm", Guardian, (Reino Unido), 18 de octubre de 2006. www.guardian.co.uk/society/2006/oct/18/cancercare.health.

© 2009 Transparency International. Todos los derechos reservados.

Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. A través de más noventa capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia acerca de los efectos nocivos de la corrupción, y trabaja junto a distintos socios en el gobierno, las empresas y la sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla. Para obtener más información, ingrese en: www.transparency.org

Esta posición sobre políticas se desprende del Informe Global de la Corrupción 2009 de TI: La corrupción y el sector privado. Es uno de los cuatro documentos basados en el Informe. Los otros analizan las políticas regulatorias, los sistemas de integridad corporativa y los carteles. A menos que se indique lo contrario, todos los datos y cifras están tomados del Informe.

El IGC 2009 reúne a más de ochenta destacados especialistas y profesionales para abordar un amplio espectro de riesgos de corrupción en el sector privado y las posibles soluciones. Para obtener más información, visite: www.transparency.org/publications/gcr.

Para comprar este informe y otras ediciones del IGC, visite el sitio web de Cambridge University Press en www.cup.cam.ac.uk.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Teléfono

+49-30-343820 -0

Fax

+49-30-347039 -12

Secretaría Internacional

Alt-Moabit 96

10559 Berlín

Alemania

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO